

José Luis LLAQUET DE ENTRAMBASAGUAS, *El régimen jurídico catalán de los centros de culto*, Rasche, Madrid 2013, 183 pp., ISBN 977-84-15560-38-8.

Durante décadas, la doctrina iuseclesiasticista ha prestado atención preferente a cuestiones, por decirlo de alguna manera, teóricas. Es decir, sobre la sustantividad propia de esta disciplina, sus fuentes, metodología, principios informadores que la distinguen y que conforman la laicidad positiva de la CE, entre otras. Junto con ello, aparecieron valiosas contribuciones sobre el alcance de los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y con el resto de confesiones en 1992, y su encaje con la LOLR. Se trataba de aspectos relacionados con el estatuto jurídico de las confesiones o entidades religiosas y de sus ministros de culto, la asistencia religiosa y –por supuesto– la eficacia civil del matrimonio religioso. En fin, también mereció abundante atención toda la controversia en torno a la asignatura de religión en la escuela; polémica que –por desgracia– sigue vigente, ante el reiterado incumplimiento por parte de las administraciones educativas de las obligaciones contraídas tanto en sede concordataria como en sede pacticia con las confesiones minoritarias.

Ahora bien, se puede comprobar que, pese a un despliegue tan amplio de temas, han quedado aspectos poco estudiados y que, sin embargo, han atraído la atención de algunos poderes públicos, o de algunos medios de comunicación.

Sin afán de exhaustividad, toda la controversia suscitada por la inmatriculación de los bienes de la Iglesia Católica *ex* artículo 206 de la ley Hipotecaria constituye un ejemplo “olvidado” por la doctrina, que sólo a raíz de algunas campañas de desinformación ha motivado la publicación de rigurosos estudios al respecto.

Otro aspecto poco tratado, y con ello me acerco a la monografía que trato de prologar, es el urbanístico; en concreto, la

dimensión espacial y física de los lugares de culto desde la perspectiva de las leyes del suelo en España. Se trata de un sofisticado sector de nuestro ordenamiento jurídico, no exento de oscuridad y de casuística. Quizás el antecedente inmediato más significativo del renacer del interés por la “edilizia di culto”, por usar la expresión acuñada en Italia, sea la monografía del prof. Rodríguez Blanco (2000) titulada *Libertad religiosa y confesiones: el régimen jurídico de los lugares de culto*, publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Desde esa fecha a nuestros días, toda publicación sobre esta materia cita esta sugerente obra.

Ahora bien, desde la aprobación en el año 2009 de la ley catalana de centros de culto, se ha abierto una etapa en la relación entre urbanismo y la libertad religiosa en su dimensión colectiva e institucional. No existe ningún precedente en nuestro país de una regulación autonómica de los lugares de culto. En ese sentido, y con independencia del juicio que merezca el contenido sustantivo de la referida ley catalana, se puede decir que esa iniciativa legislativa es pionera, y está llamada a influir en el futuro en otras CC.AA.

Por este cúmulo de razones, pienso que la monografía del profesor Llaquet de Entrambasaguas es especialmente oportuna. No existía hasta el momento un estudio completo sobre la génesis de esta peculiar ley, su reglamento de desarrollo de 2010 y su proyecto de reforma de 2011 (que no llegó a aprobarse). Es cierto que ya hay varios artículos científicos al respecto, pero aún no contábamos con un libro que detalle cómo se aprobó esa ley, y que ayude a contextualizar qué se aprobó y por qué.

Y ésta es la mayor virtud de este trabajo. A partir de ahora, quien quiera analizar

la referida ley de centros de culto, necesariamente habrá de hacer referencia a este pormenorizado y detallado estudio; como todo el que ha escrito sobre el régimen jurídico general de los lugares de culto –incluido quien suscribe estas líneas– ha mencionado la aludida obra del prof. Rodríguez Blanco.

El libro que aquí analizo está dividido en 7 capítulos. El capítulo I, titulado *Políticas públicas religiosas en la Catalunya del S. XXI* (pp. 27-32), describe someramente la construcción de una administración autonómica catalana competente en materia religiosa: la *Direcció General d'Afers Religiosos*, que fue la encargada de tramitar y presentar un anteproyecto de ley al consejo de Gobierno de la Generalitat.

El capítulo II, por su parte, tiene como título *Antecedentes remotos de la Llei dels centres de culte* (pp. 33-41) y describe los trabajos previos a partir del año 2004, que ayudan a comprender por qué se decidió aprobar una norma con rango de ley.

El capítulo III, *Los diversos Anteproyectos de Ley* (pp. 45-79), constituye un apartado muy interesante para los estudiosos, pues va describiendo las distintas versiones del articulado que en el seno de la propia administración autonómica se le va dando al documento de trabajo que se decantará finalmente en el proyecto de ley. Desde el borrador de junio de 2007, el posterior trámite de audiencia a los interesados, el borrador de 22 de octubre de 2007, el anteproyecto de ley y finalmente el proyecto de ley aprobado por la Generalitat y remitido al Parlamento de Catalunya.

A continuación, en el capítulo IV, *Del Projecte de Llei a la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte* (pp. 81-107), se estudia la tramitación parlamentaria. Son interesantes las comparecencias en la *Comissió d'Afers Institucionals* de la cámara legislativa catalana, que ponen de manifiesto la incertidumbre que genera esta nueva norma en las confesiones. A este respecto, en el libro

se alude, con acierto, a las intervenciones de algunas entidades que –en mi opinión– no queda claro por qué son llamadas por el Parlamento autonómico, qué pueden aportar en una ley sobre centros de culto, ni bajo qué título o interés legítimo participan en la citada Comisión. A modo de ejemplo se cita a dos representantes de una asociación denominada «Ateus de Catalunya» que –como es obvio– ni tienen lugares de culto, ni son titulares del derecho de libertad religiosa.

Como quiera que sea, este capítulo menciona, de modo muy oportuno, la influencia de la ley catalana en el malogrado Anteproyecto de Ley de centros de culto de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El capítulo V, titulado *El Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei* (pp. 109-138), examina el reglamento de desarrollo de la Ley catalana. A este respecto, quisiera subrayar que el autor analiza una documentación inédita, y que, hasta donde llega mi conocimiento, no aparece en ninguna publicación anterior.

El carácter exhaustivo de este libro –resaltado por el Prof. Torres Gutiérrez en el prólogo– creo que queda especialmente de manifiesto en el capítulo VI. Su título es el siguiente: *La Ordre VCP/405/2010, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts a les despeses ocasionades per l'adaptació dels centres de culte* (pp. 139-148). Es decir, se analiza la cuantía de las subvenciones, los destinatarios, los desistimientos y las denegaciones. Como se indica en la monografía, no se han convocado nuevas ayudas con posterioridad, quizás por las enormes tensiones presupuestarias que la administración autonómica está viviendo.

Finalmente el capítulo VII, *El Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/2009* (pp. 149-176), analiza la *non nata* reforma de la ley, que matizaba alguno de sus aspectos más polémicos y que, entre otros aspectos, ampliaba el plazo para adaptar los

centros de culto a la nueva normativa técnica de 5 a 10 años. Como he adelantado, esta reforma no fue aprobada por el final anticipado de la legislatura. La obra finaliza con una hipótesis que con posterioridad se ha verificado. En efecto, se manifiesta que es muy plausible que se realice una modificación puntual de la ley en la actual legislatura a los solos efectos de ampliar el mencionado plazo de adaptación a los nuevos requisitos de construcción. Hay que añadir que esta posibilidad se ha cumplido mediante el art. 210 de la ley catalana 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, que ha ampliado de cinco a diez años, el plazo de que disponen para hacer las adaptaciones necesarias establecidas al reglamento que desarrolla la ley.

Es cierto que dada la fecha de publicación del libro fue imposible recoger esta última novedad legislativa, pero todo ello prueba que el trabajo del Prof. Llaquet ha sido concienzudo, y que ha acudido a muchas fuentes que le han permitido predecir una reforma legal antes de que se produjera o trascendiera a la opinión pública.

Por todo lo anterior, pienso que esta monografía es de obligada referencia en el futuro a la hora de escribir sobre el régimen jurídico de los centros de culto en España y espero que el autor continúe esta tarea científica en los futuros acontecimientos legislativos y jurisprudenciales que, a buen seguro, nos deparará la relación entre urbanismo y libertad religiosa en España.

Juan J. GUARDIA HERNÁNDEZ

Damián NĚMEC, *Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010)*, Peeters, Leuven 2012, 544 pp., ISBN 978-90-429-2519-9.

Hay libros jurídicos que tienen un objeto muy preciso. Hay otros que bajo títulos genéricos abordan un amplio espectro de cuestiones. Esto último es muy frecuente en el campo del Derecho Eclesiástico del Estado, en el que temas como la laicidad, la libertad religiosa o la discriminación dan pie a una mezcla de reflexiones jurídicas, políticas y sociológicas de diversa entidad al hilo del comentario de novedades legislativas o pronunciamientos jurisprudenciales. No es el caso de la monografía que ahora se recensiona, la cual cuenta con un objeto concreto: el estudio de los acuerdos concordatarios entre la Santa Sede y los países de la Europa del Este entre los años 1990 y 2010. Esto permite al autor tratar el tema con profundidad y rigor. Por su parte, el eventual lector se encontrará con información precisa y com-

pleta sobre el enunciado que recoge el título de la obra.

A nuestro juicio, el libro de Damián Nemec es de una destacada relevancia y utilidad por las tres razones que indico a continuación. En primer lugar, porque cuenta con un anexo documental (pp. 325-544) en el que se recogen los concordatos firmados con los países de la Europa del Este a partir de 1990, así como extractos de algunos acuerdos concordatarios previos y borradores de convenios en negociación. Esto permite la consulta directa de los textos, algo imprescindible para una mejor comprensión de los temas que el autor desarrolla, así como para aproximarse a la regulación de las relaciones Iglesia-Estado en ese ámbito geográfico. No es que los pactos concordatarios sean de difícil localización, pero siempre es de gran ayuda para